

San Juan de Pasto, 16 de Octubre de 2024.

Señor

JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO.

E. S. D.

Ref. Reparación Directa No. 2021-00118-00
APELACIÓN SENTENCIA Y SUSTENTACIÓN.

Cordial saludo,

JAIRO ROMERO INSUASTY, mayor de edad, vecino de Pasto, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.254.391 de Pasto, abogado en ejercicio bajo la Tarjeta Profesional No. 192.263 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la parte demandante dentro del proceso de la referencia según el memorial de sustitución y poderes anexos al presente y dentro del término legal, por medio del presente me permito presentar **RECURSO DE APELACIÓN** contra la sentencia del 30 de septiembre de 2023, notificada el 1 de octubre de 2024, al vía correo electrónico al abogado que me antecede, lo anterior en los siguientes términos:

Llama la atención la forma como el fallo de primer grado en sus consideraciones de manera categórica da por establecido que para los días 26 y 27 de abril de 2020 la entidad demandada sí estableció el diagnóstico de apendicitis de manera oportuna, a diferencia de lo que se expuso en el relato de hechos en los que se apoyó la demanda de reparación, con el soporte probatorio idóneo rendido por un médico forense calificado por demás.

Para los demandantes, hijos y hermanos de la víctima, la responsabilidad de la demandada tiene lugar en atención a la falla del servicio médico, que no estuvo encaminado a salvarle la vida, razón por la que al momento de la impetrar la demanda suplicaron que les respondan patrimonialmente por los daños ocasionados con su conducta.

Por la evolución de la apendicitis sobrevino la perforación de la misma, lo que se dio entre 12 horas y 24 horas después del inicio de los síntomas. Perforada la apéndice ocasiona una peritonitis lo que supone una sepsis que fue mortal pero a la intervención que hizo otra entidad hospitalaria en la ciudad de Pasto. Es pertinente resaltar que la apendicitis es una patología cuya evolución hacia la peritonitis es perfectamente prevenible si se diagnostica y trata de manera oportuna. En el caso bajo examen, quedó demostrado que la atención brindada por la entidad demandada no fue la adecuada, ni en términos de diagnóstico ni en cuanto al tratamiento oportuno, así la tardanza de remisión entonces del municipio de Linares a la ciudad de Pasto fue extemporánea lo que implicó el desenlace triste y fatal de la víctima. No fue el Covid-19 la causa del deceso de la paciente María Ismenia Chamorro Eraso. La tesis del sentenciador en tal sentido no resiste el menor análisis.

El dolor abdominal de la víctima que fue prolongado y continuo con el proceso febril que eso conlleva, es muestra indudable de la dolencia que no fue descubierta a tiempo por el personal médico de la entidad demandada. La cirugía que se hizo por encima del tiempo para combatir la enfermedad resultó en vano, pese a los esfuerzos de otros facultativos distintos de los que tuvieron el manejo de la misma en

las instalaciones de la entidad demandada, en poder de los cuales se dio un hecho gravísimo: la apéndice se reventó y causó la peritonitis que fue la causa del deceso de la paciente que buscaba atención a sus dolencias.

La cirugía realizada no se dio inmediatamente en Pasto. Tarde en el tiempo se da la remisión por fuera de los protocolos mismos de la crisis mundial en salud de ese momento por la pandemia. Todos los hechos previos ocurren en las instalaciones de la ESE Juan Pablo II del Municipio de Linares, donde la víctima había empeorado y las complicaciones no fueron atendidas con urgencia y prioridad que el caso ameritaba.

Las complicaciones entonces, no se dieron en otra entidad hospitalaria que no fuera otra que la de la entidad demandada. Recuérdese además que la distancia entre Linares a la ciudad de Pasto en el tiempo, es entre dos horas y media a tres horas por carretera destapada y el traslado seguramente se complicó más, por estar el mundo en pandemia y las medidas fueron más estrictas para su movilización de un lugar a otro, tiempo que no ha sido considerado para nada en la parte motiva del fallo con el cual concluye la primera instancia.

Un apéndice roto como fue lo que le sucedió a la señora MARÍA ISMENIA CHAMORRO ERASO, le produjo la infección en su abdomen. Y eso se llama peritonitis de naturaleza grave en extremo que le causó la muerte, así en Pasto haya recibido atención en ese sentido, que nada tiene que ver con el Covid-19. Este fue posterior a la apendicitis. En Linares no había contagio por ese virus mortal.

El descuido, la negligencia y la falta de acción oportuna a cargo de los facultativos médicos de la entidad demandada dieron paso a que la víctima sufra apendicitis fase cuatro, es decir ya estaba perforada y el mal pasó a peritonitis generalizada purulenta y se liberaron las heces fecales que a la postre comprometieron su vida, dándose un fallecimiento prematuro dada la edad a la que murió la enferma: madre y hermana de los demandantes. La apendicitis aguda se dio en el Municipio de Linares.

La paciente fue recibida en Pasto en ese estado. Los médicos de la entidad de la ciudad de Pasto, hicieron su trabajo en función de salvar su vida, pero la apendicectomía y sus efectos adversos resultaron infructuosos y cobraron su vida, por la infección tantas veces endilgada al personal al servicio de la entidad demandada. No existe reporte alguno de contagio por Covid-19. El mal original tiene relación de causalidad con el título de imputación advertido en la demanda y en el concepto pericial. Éste fue interpretado de una forma distinta al recorrido que tuvo que afrontar la paciente.

El Consejo de Estado en sentencia del 18 de febrero de 2010, con ponencia de la Consejera Dra. RUTH STELLA CORREA PALACIOS, concluyó:

“En síntesis, el Estado puede ser declarado patrimonialmente responsable de los daños que se deriven de la omisión en la prestación del servicio médico o de su prestación deficiente, cuando tales daños se producen como consecuencia de esa omisión o deficiencia; cuando por causa de tales deficiencias el paciente pierde la oportunidad que tenía de mejorar o recuperar su salud, o sencillamente cuando la prestación asistencial no se brinda como es debido, y cuando se vulneran otros derechos o intereses protegidos por el ordenamiento

jurídico, aún en eventos en los que dichas prestaciones resultan convenientes a la salud del paciente, pero se oponen a sus propias opciones vitales”.

Había lugar a la indemnización de perjuicios porque concurren los tres elementos o ingredientes de la misma, a saber: 1) existencia de un daño jurídico; 2) la imputación del daño a la acción u omisión de la entidad demandada; 3) existencia del vínculo causal entre el daño y la acción u omisión de la entidad pública.

El daño se entiende como una alteración que afecta negativamente que como en el caso materia de la demanda afectó la integridad de una mujer joven, que pierde su vida por la acción y omisión de que da cuenta aquella, donde se relata el factum que fuera verificado también por un médico forense que en la audiencia de pruebas, culminó su intervención afirmando que la vida pudo salvarse de haberse actuado con celeridad que requería la enfermedad de la víctima.

La causa del deceso fue la peritonitis antecedida por una apendicitis en las precisas circunstancias que están probadas en el proceso. la acción de salvamento fue tardía y por eso el título de imputación recae en la entidad convocada a este proceso.

Existió falla del servicio por cuanto el mismo fue inoportuno, inadecuado, irregular e ineficiente en grado tal que llevó que llevó al deceso de la madre y hermana de los demandantes, que permitía declarar la responsabilidad patrimonial de la convocada al proceso como demandada, habida cuenta que el daño fue consecuencia de la falla del servicio de salud.

No existe un solo testimonio porque los que pidió la entidad demandada no concurrieron a la audiencia de pruebas, que acredite lo contrario a lo que el médico forense encontró como causa del deceso de la señora MARÍA ISMENIA CHAMORRO ERASO.

Ningún médico se atrevió a decir que el servicio fue eficiente. Al contrario, su no comparecencia está acreditando así sea por vía de inferencia que no existió prudencia, diligencia e idoneidad en el manejo de la enfermedad que registra el concepto pericial aportado con la demanda. Se perfilan entonces los cargos de imprudencia, negligencia o impericia del personal que no prestó adecuadamente el servicio de salud que reclamaba la víctima.

La jurisprudencia del órgano de cierre en materia de la jurisdicción contencioso administrativa ha recomendado que en caso como en la falla del servicio, la carga de la prueba corra a cargo de la entidad demandada, donde sus profesionales en salud sean los que demuestren que ejecutaron la respectiva conducta profesional, llamados a explicar los procedimientos que fueron puestos en tela de juicio por el perito forense contratado por los demandantes.

Los médicos pueden probar que actuaron con la eficiencia, prudencia o idoneidad requeridas en el manejo de la paciente con la sintomatología que se conoce en autos, que le permite al sentenciador un mejor conocimiento de las causas, procedimientos, técnicas y motivos que llevan a los profesionales a asumir determinada conducta o tratamiento. Como no existe esa prueba, entonces el concepto pericial

no merece ninguna descalificación y menos para sostener una tesis tan errónea como la que predica el fallo, según el cual la muerte fue por Covid-19.

Las complicaciones y consecuencias dañosas ante la omisión probatoria que en tal sentido se dio por la entidad demandada, resulta evidente la falla de servicio que a la postre ocasionó los perjuicios materiales, morales y demás ítems que fueron determinados en el libelo genitor de este proceso, concurriendo los elementos básicos de la responsabilidad extracontractual administrativa que fue echada de menos en la sentencia de primer grado dictada por su Despacho.

El daño que se imputa a la entidad demandada se deriva del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, que da paso a la antijuridicidad de aquel, donde la conducta inadecuada hace surgir la falla en el servicio. No se hizo como una entidad de atención médica diligente; al contrario, la conducta fue por acción y omisión que fue la causa del daño cuya reparación resulta a todas luces viables declararla en la segunda instancia. No hubo cualquier tipo de falta. Fueron plurales, tal como lo describe el concepto pericial.

El servicio recibido por la occisa fue anormalmente deficiente y procedía declarar la responsabilidad deprecada en la demanda. El fallecimiento estuvo antecedido por el enmascaramiento de los verdaderos síntomas de la paciente, a quien se le aplicó medicamentos prohibidos como los antibióticos y los analgésicos de que da cuenta la historia clínica y el propio análisis y estudio que realizó el médico forense.

El mal manejo de la enfermedad fue complicando la salud de la señora MARÍA ISMENIA CHAMORRO ERASO que produjo los sucesos que acabaron su propia existencia con toda una vida por delante. Nada tenía que ver el Covid-19 que ciertamente para la época de los hechos sobrevino en la ciudad de Pasto. El contagio no se dio en la sede de la entidad demandada. El daño no tiene la relación de causalidad con el virus que ahora se lo trae a cuento para eliminar sin fundamento probatorio la responsabilidad patrimonial extracontractual administrativa y dejando de condenar la parte demandada al pago de los perjuicios irrogados a los demandantes.

Lastimosamente no existe claridad en la parte motiva del fallo de primer grado frente al caso examinado, donde no había lugar a negar las súplicas que enmarcan la causa petendi y el petitum.

Los pasos previos relacionados con la enfermedad de quien a la postre resultó víctima fatal, fueron echados de menos por el personal médico de la entidad demandada.

En efecto, los facultativos que intervinieron en el caso materia de decisión adversa a los demandantes, no emplearon todos los medios adecuados para realizar un diagnóstico certero de la paciente.

En medicina existen diversas guías para el diagnóstico de apendicitis que establecen pautas claras, tales como la realización de estudios de laboratorio, paraclínicos, imagenológicos y quirúrgicos, algunos de los cuales si bien se realizaron, no arrojaron el diagnóstico de rigor para determinar la naturaleza del quebranto de la salud de la víctima.

Las omisiones conllevaron a la falta de un diagnóstico adecuado en un caso de apendicitis que acarreó graves consecuencias, incluyendo la perforación de apéndice, peritonitis e incluso la muerte como efectivamente ocurrió con la citada paciente. No hubo tratamiento oportuno para salvar la vida. Los medicamentos aplicados enmascararon la enfermedad agravando más la integridad corporal y el resultado fue su fallecimiento.

En este proceso quedó probado que no se utilizaron todos los recursos diagnósticos posibles con la señora MARÍA ISMENIA CHAMORRO ERASO, lo que ocasionó la falla del servicio en su atención, así como el diagnóstico tardío y error en el mismo.

Inicialmente el diagnóstico fue de DOLOR ABDOMINAL A ESTUDIO. UROLITIASIS VS. INFECCIÓN URINARIA. Para paliar la enfermedad hacia el año 2018, bajo la creencia de tener UN CÓLICO RENAL, se decide iniciar el manejo con ANALGÉSICOS CON TRAMADOL, ACETAMINOFÉN. Fue hospitalizada.

Para el día de los hechos, 27 de abril de 2020, se conoce que la víctima ingresa a la UCI DE CORPOSALUD por CUADRO DE 24 HORAS consistente en DOLOR ABDOMINAL, CÓLICO EN FLANCO Y FOSA ILÍACA DERECHA, REMITIDA DE LINARES con IDX DE APENDICITIS AGUDA, ENCONTRANDO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. Ese el tiempo que se debe tener en cuenta para interpretar la gravedad de la enfermedad. No la hora de la cual se vale el Despacho para considerar que fue el Covid-19 la que ocasionó el fallecimiento.

La historia clínica y su contenido no reflejan los sucesos como fueron analizados por el médico forense. Esa prueba documental descubre que existieron errores médicos importantes como son diagnóstico errado, tardío, negligencia por omisión y por comisión. La paciente con las complicaciones en su salud, debió salir de Linares el día 24 de abril de 2020, pero su remisión se dio el 27 del mismo mes y año, llegando a CORPOSALUD a las 11.12 de la noche. Los tres días fueron fatales para la paciente que fallece en Pasto. El resultado no fue otro que DESCUIDO POR ERROR EN EL DIAGNÓSTICO. NO HUBO PREVENCIÓN QUE IMPLICABA CIRUGÍA A TIEMPO. DE AHÍ QUE LA REMISIÓN FUE TARDÍA O EXTEMPORÁNEA.

En ese orden de ideas, es claro que para los actores del proceso el caso de la víctima representa responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. La remisión de la paciente se dio muy tarde, pero el dolor abdominal jamás fue definido como apendicitis, hasta que se perfora, produciendo la peritonitis, patología mortal, que fue de mucha gravedad según el concepto pericial aportado con la demanda.

Por eso el concepto forense advirtió desde el principio que la remisión debió darse cuando la entidad demandada a través de los profesionales médicos no dio certeza en el diagnóstico. La omisión condujo a la apendicitis perforada que provocó la peritonitis enfermedad mortal, que si no se interviene quirúrgicamente de forma inmediata, ocasiona la muerte como efectivamente se dio con la paciente MARÍA ISMENIA CHAMORRO ERASO.

La cronología de la enfermedad no tiene el sentido que deja entrever el fallo. Entre la enfermedad y el fallecimiento existe relación de causalidad, pero el Covid-19 es el resultado que no puede enervar la indemnización para los dos hijos y sus dos hermanos que fungen en este asunto como demandantes.

El Consejo de Estado en sentencia del 29 de Abril de 2019, ponencia del Dr. RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO, en el 17001-23-31-000-1998-00667-01(25574), sobre el tema ha indicado: “La Sala interpreta ese derecho social no sólo como la posibilidad formal de acceder a esa clase de servicios, sino a que estos se presten de manera eficiente, digna, responsable, diligente y de acuerdo con la *lex artis*; debe traducirse por tanto, en que a quien en evidentes condiciones de debilidad, derivadas de la enfermedad que lo aqueja, acude en procura del servicio, se le brinde una atención de calidad que le permita tener las mejores expectativas de recuperar la salud.

Esa interpretación no supone una obligación de resultado para el prestador del servicio, sino que debe entenderse como la garantía del paciente a obtener la atención en las mejores condiciones disponibles, bajo el entendido de que quien acude en busca de un servicio médico confía en que será tratado de manera adecuada.

Por otra parte, en relación con la carga de la prueba, se ha dicho que corresponde, en principio, al demandante, pero dicha exigencia se modera mediante la aceptación de la prueba indirecta de estos elementos de la responsabilidad a través de indicios¹⁸. En palabras de la Sala¹⁹:

*La responsabilidad estatal por fallas en la prestación del servicio médico asistencial no se deriva simplemente a partir de la sola constatación de la intervención de la actuación médica, sino que debe acreditarse que en dicha actuación no se observó la *lex artis* y que esa inobservancia fue la causa eficiente del daño. Esa afirmación resulta relevante porque de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, el derecho a la reparación se fundamenta en la antijuridicidad del daño, sin que sea suficiente verificar que la víctima o sus beneficiarios no estaban en el deber jurídico de soportarlo para que surja el derecho a la indemnización, dado que se requiere que dicho daño sea imputable a la administración, y sólo lo será cuando su intervención hubiera sido la causa eficiente del mismo (subrayado no original).*

La prueba de la relación causal entre la intervención médica y el daño sufrido por el paciente reviste un grado de complejidad a veces considerable, no sólo por tratarse de un dato empírico producido durante una práctica científica o técnica, comúnmente ajena a los conocimientos del propio paciente, sino porque, además, por lo regular, no queda huella de esa prestación, diferente al registro que el médico o el personal paramédico consigne en la historia clínica, la que, además, permanece bajo el control de la misma entidad que prestó el servicio²⁰.

Las dificultades a las que se enfrenta el afectado cuando pretende acreditar el nexo causal, no han sido soslayadas por la jurisprudencia; por el contrario, para resolver los casos concretos, en los cuales no se cuente con el dictamen serio y bien fundamentado de un experto, que establezca o niegue esa relación, se ha buscado apoyo en las reglas de prueba desarrolladas por la doctrina nacional y foránea.

*Así, se ha acudido a reglas como *res ipsa loquitur*, desarrollada en el derecho anglosajón; o de la culpa virtual elaborada por la doctrina francesa, o la versión alemana e italiana de la prueba *prima facie* o probabilidad estadística²¹, que tienen como referente común el deducir la relación causal y/o la culpa en la prestación del servicio médico a partir de la verificación del daño y de la aplicación de una regla de experiencia, conforme a la cual existe nexo causal entre un evento dañoso y una prestación médica cuando, según las reglas de la experiencia (científica, objetiva, estadística), dicho daño, por su anormalidad o excepcionalidad, sólo puede explicarse por la conducta negligente del médico y no cuando dicha negligencia pueda ser una entre varias posibilidades, como la reacción orgánica frente al procedimiento suministrado o, inclusive, el comportamiento culposo de la propia víctima.*

Cabe destacar que la aplicación de esas reglas probatorias, basadas en reglas de experiencia guardan armonía con el criterio adoptado por la Sala en relación con la teoría de la causalidad adecuada o causa normalmente generadora del resultado, conforme a la cual, de todos los hechos que anteceden la producción de un daño sólo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata²². La elección de esa teoría se ha hecho por considerar insatisfactoria la aplicación de otras, en particular, la de la equivalencia de las condiciones, según la cual basta con que la culpa de una persona haya sido uno de los antecedentes del daño para que dicha persona sea responsable de él, sin importar que entre la conducta culposa y el daño hubieran mediado otros acontecimientos numerosos y de gran entidad.

En varias providencias proferidas por la Sala se consideró que cuando fuera imposible demostrar con certeza o exactitud la existencia del nexo causal, no sólo por la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados sino también por la carencia de los materiales y documentos que probaran dicha relación, el juez podía “contentarse con la probabilidad de su existencia”²³, es decir, que la relación de causalidad quedaba probada cuando los elementos de juicio que obraran en el expediente conducían a “un grado suficiente de probabilidad”²⁴, que permitían tenerla por establecida.

De manera más reciente se precisó que la exigencia de “un grado suficiente de probabilidad”, no implica la exoneración del deber de demostrar la existencia del vínculo causal entre el daño y la actuación médica, que haga posible imputar responsabilidad a la entidad que presta el servicio, sino que esta es una regla de prueba, con fundamento en la cual el vínculo causal puede ser acreditado de manera indirecta, mediante indicios²⁵.

Así la Sala ha acogido el criterio según el cual para demostrar el nexo de causalidad entre el daño y la intervención médica, los indicios se erigen en la prueba por excelencia, dada la dificultad que en la mayoría de los casos se presenta de obtener la prueba directa. Indicios para cuya construcción resulta de utilidad la aplicación de reglas de la experiencia de carácter científico, objetivo o estadístico, debidamente documentadas y controvertidas dentro del proceso.

El daño antijurídico quedó acreditado, bajo la consideración que la señora MARÍA ISMENIA CHAMORRO ERASO acudió a la entidad demandada, en procura de atención médica por sus quebrantos de salud durante muchas ocasiones, tal como se encuentra acreditada con la historia clínica y el concepto pericial aportado con el libelo genitor de este proceso.

Así, aunque la complicación del estado de la paciente podía ocurrir como situación inherente a su estado de salud por una apendicitis, lo cierto es que en este proceso se reprocha la actuación del agente de la administración como determinante en la causación del daño y en el trágico resultado final; así, no se circunscribe el caso a señalar que la ausencia de tratamiento idóneo impidió la recuperación del paciente, sino que su estado se complicó y agravó más allá de lo esperado como consecuencia de la actuación que se le imputa a la demandada.

Bajo ese escenario, el análisis de lo que sucedió con la madre y hermana que se conoce en autos, no se puede abordar el proceso desde la perspectiva del daño entendido como la pérdida de la oportunidad de recuperación, sino como el agravamiento y muerte misma del paciente, determinadas por las fallas del servicio que se atribuye a la demandada.

Ese daño, el efectivo deceso de la señora MARÍA ISMENIA CHAMORRO ERASO, se acreditó en legal forma en el proceso mediante el registro civil de defunción que fuera aportado con la demanda de reparación directa.

En cuanto a la imputación del daño también se encuentra demostrado no solo con el registro documental aportado al proceso, el concepto pericial y el propio testimonio del médico Rubén Darío Angulo González, quien

bajo la gravedad del juramento ante la pregunta del propio operador judicial concluyó que la vida de la víctima pudo ser salvada de haber mediado la debida diligencia de parte del personal al servicio de la entidad demandada.

No existió agilidad en los tiempos de respuesta a la situación precaria de salud que presentaba la víctima en la atención primaria y desde luego la remisión a otra entidad de nivel superior a la de la entidad demandada que resultó inadecuada y determinante en la producción del daño irreversible, pues se perdió una preciosa vida en una edad muy temprana, dejando en la orfandad especialmente a sus dos hijos y el dolor de perder tan pronto la vida a la hermana muy apreciada por los dos demandantes restantes.

De ahí que los agudos cuestionamientos de los pasos observados por el personal médico fueron absolutamente dejados al descubierto en el peritazgo rendido por un forense de vasta experiencia, neutral en sus reflexiones y con el estudio exhaustivo que se fundamentó en los datos que se encuentran consignados en la historia clínica, sin que sea tesis válida de eximir de responsabilidad por haberse dado el fallecimiento por el Covid-19.

El error en el diagnóstico resultó también importante en el caso bajo examen que tampoco ha merecido una tesis ajustada a la realidad de lo que le pasó a la madre y hermana de los cuatro demandantes. Existe una inmensa jurisprudencia sobre el caso que ha permitido condenar a las entidades prestadoras de salud cuando se les achaca la responsabilidad por falla médica, error en el diagnóstico, falla del servicio por acción y por omisión, tal como ocurrió en el proceso que subirá a segunda instancia para su nuevo estudio, donde seguramente la sentencia será revocada.

Suplico conceder el recurso de alzada para que el superior funcional suyo revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar declare la responsabilidad de la entidad llamada al proceso y la consiguiente condena afirmada en la demanda de reparación directa que conoce la jurisdicción administrativa.

Atentamente,



JAIRO ROMERO INSUASTY.

C. C. No. 1.085.254.391.

T. P. No. 192.263 del C.S.J.



Legal Sur Group <legalsurgroup@gmail.com>

Confiero el poder al abogado Jairo Romero Insuasty

1 mensaje

Karen Romo <karenrch2444@gmail.com>

4 de octubre de 2024, 7:28 a.m.

Para: legalsurgroup@gmail.com

Buenos días, adjunto poder.



PODER KAREN. (1).docx

27K

San Juan de Pasto, 4 de octubre de 2024.

**Señor
JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE PASTO
E. S. D.**

**Ref. REPARACIÓN DIRECTA No. 52001333300220210011800 de ALEXIS
HERNEY ROMO CHAMORRO Y OTROS.**

Yo, KAREN MAYERLY ROMO CHAMORRO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía Número 1.004.598.815 de Linares, vecina de Pasto, residente en la calle 10 No. 38-101, Barrio Panamericano, Mail: karenrch2444@gmail.com, celular 314 6050377, por virtud del presente escrito, respetuosamente, **MANIFIESTO:**

Que al Abogado **JAIRO ROMERO INSUASTY**, igualmente mayor de edad, vecino de Pasto, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.254.391 de Pasto, portador de la Tarjeta Profesional No. 192.263 del Consejo Superior de la Judicatura, oficina situada en la calle 19 No. 21-60, oficina 311, Edificio Puerta de Oro, mail: legalsurgroup@gmail.com, celular 300 4667896, le **OTORGO PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** para que interponga y sustente el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, calendada el 30 de septiembre de 2024, por la que negó las súplicas de la demanda y me represente en el proceso que conoce su Despacho, siendo entidad demandada la E.S.E JUAN PABLO II DEL MUNICIPIO DE LINARES, correo electrónico esejuanpablo2@hotmail.com, NIT 814006620-7. Revoco el poder anterior.

Mi apoderado queda facultado para recibir, conciliar, transigir, sustituir, renunciar, reasumir, interponer recursos, desistir, etc. y toda facultad que resulte compatible con el mandato que confiero, de conformidad con las potestades que consagra el artículo 77 del CGP.

Atentamente,



**KAREN MAYERLY ROMO CHAMORRO
C. No. 1.004.598.815 de Linares**



Legal Sur Group <legalsurgroup@gmail.com>

PODER PARA EL RECURSO DE APELACIÓN

1 mensaje

ALEXIS ROMO CHAMORRO

<ahromoc@gmail.com>

3 de octubre de 2024,

9:31 p.m.

Para: "legalsurgroup@gmail.com" <legalsurgroup@gmail.com>

Cordial saludo:

Adjunto poder firmado para fines pertinentes.

Confiero poder al abogado Jairo Romero Insuasty

Quedo atento.



NUEVO PODER ALEXIS..pdf

313K

Apartadó, Antioquia, 4 de octubre de 2024.

Señor

**JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO
PASTO-DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
E. S. D.**

**Ref. REPARACIÓN DIRECTA No. 52001333300220210011800 de ALEXIS
HERNEY ROMO CHAMORRO Y OTROS.**

Yo, ALEXIS HERNEY ROMO CHAMORRO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Número 1.053.812.849 de Manizales, vecino de Apartadó-Antioquia, residente en la calle 106 No. 109d-28, Casa 61 Montecarlo, celular 321 2599665 Mail: ahromoc@gmail.com, celular 314 6050377, por virtud del presente escrito, respetuosamente, **MANIFIESTO**:

Que al Abogado **JAIRO ROMERO INSUASTY**, igualmente mayor de edad, vecino de Pasto, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.254.391 de Pasto, portador de la Tarjeta Profesional No. 192.263 del Consejo Superior de la Judicatura, oficina situada en la calle 19 No. 21-60, oficina 311, Edificio Puerta de Oro, mail: legalsurgroup@gmail.com, celular 300 4667896, le **OTORGO PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** para que interponga y sustente el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, calendada el 30 de septiembre de 2024, por la que negó las súplicas de la demanda y me represente en el proceso que conoce su Despacho, siendo entidad demandada la E.S.E JUAN PABLO II DEL MUNICIPIO DE LINARES, correo electrónico esejuanpablo2@hotmail.com, NIT 814006620-7. Revoco el poder anterior.

Mi apoderado queda facultado para recibir, conciliar, transigir, sustituir, renunciar, reasumir, interponer recursos, desistir, etc. y toda facultad que resulte compatible con el mandato que confiero, de conformidad con las potestades que consagra el artículo 77 del CGP.

Atentamente,

Alexis Romo

**ALEXIS HERNEY ROMO CHAMORRO
C. No. 1.053.812.849 de Manizales.**

ACEPTO:

**JAIRO ROMERO INSUASTY.
C. C. No. 1.085.254.391 de Pasto.
T. P. No. 192.263 del Consejo Superior de la Judicatura.**



Legal Sur Group <legalsurgroup@gmail.com>

Reparación Directa No. 2021-00118-00 VS. E.S.E. JUAN PABLO II LINARES-NARIÑO. SUSTITUCIÓN PODER.

1 mensaje

carlos hernando montenegro urbano
<carloshernandomontenegro@gmail.com>
Para: legalsurgroup@gmail.com

16 de octubre de
2024, 6:29 a.m.

Como apoderado de los señores MENANDRO SOFONÍAS y FANNY MARLENE CHAMORRO ERAZO de notas civiles que se conocen en el proceso, hermanos de la fallecida MARÍA ISMENIA CHAMORRO ERASO, manifiesto Que al Abogado **JAIRO ROMERO INSUASTY**, igualmente mayor de edad, vecino de Pasto, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.254.391 de Pasto, portador de la Tarjeta Profesional No. 192.263 del Consejo Superior de la Judicatura, oficina situada en la calle 19 No. 21-60, oficina 311,

Edificio Puerta de Oro, mail: legalsurgroup@gmail.com, celular 300 4667896, **LE SUSTITUYO EL PODER A MI CONFERIDO**, para que asuma la representación de la parte demandante en el proceso de reparación directa en contra la la ESE JUAN PABLO II DEL MUNICIPIO DE LINARES, dentro del cual se dictó sentencia de primera instancia, calendada el 30 de septiembre de 2024, negando las súplicas de la demanda e interponga y sustente el recurso de apelación por ante el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto que decide la primera instancia.

La sustitución se efectúa con las mismas facultades de recibir, transigir, conciliar, desistir, sustituir, renunciar, reasumir y cuanta facultad resulte compatible con el mandato otorgado. Fue imposible entrar en contacto con los interesados.

--

Carlos Hernando Montenegro U.
Abogado Litigante
cel: 3172410674